sentido, pues es de sobra conocida. A lo que sí es menester hacer referencia es al caso *Dred Scott* (1857), en el que Taney sustentó la tesis de que los negros, "libres o esclavos, no pueden ser ciudadanos de los Estados Unidos".

El caso *Dred Scott* ha dado pie para numerosas polémicas en torno a Taney, no muy favorables en cuanto a sus resultados. Cuando, a pocos días de su muerte, un congresista propuso que el busto de Taney fuese colocado en la Suprema Corte, otro congresista respondió "que el nombre de Taney debería ser borrado de las páginas de la historia norteamericana".

Spector argumenta en defensa de Taney y del caso *Dred Scott* diciendo que Taney era contrario a la esclavitud (él mismo había manumitido a sus esclavos); pero que cuando interpretaba la Constitución lo hacía ateniéndose a la intención de sus autores. En otras palabras, se trataba de un ortodoxo que entendía que las normas constitucionales vigentes debían atender siempre a su significado original.

El argumento de Spector nos parece vulnerable. Una de la más importantes particularidades del sistema constitucional norteamericano es su gran adaptabilidad a las diferentes circunstancias históricas porque ha atravesado. De ahí su prolongada supervivencia. Asegurar lo contrario, equivale a negar un hecho evidente e indubitable.—Diego VALADÉS.

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ABADIE-AICARDI, Oscar. *Iberoamericana, el mar territorial y la lucha por la soberanía*. "Revista de Política Internacional", núm. 122, julio-agosto, 1972. pp. 83-148. Belgrado, Yugoslavia.

El artículo que comentamos versa sobre uno de los temas más controvertidos del Derecho internacional público de nuestros días: la zona marítima de las 200 millas. Se ofrece un panorama histórico sobre las pretensiones de los Estados ribereños sobre sus mares adyacentes; curiosamente aparece que los Estados industriales, ahora acérrimos enemigos de la zona de las 200 millas, en diversas etapas han reclamado zonas exclusivas de pesca.

El desarrollo del tema se sitúa en la confrontación insalvable que se da entre los intereses de los Estados superdesarrollados y las legítimas aspiraciones de los países en vía de desarrollo. Así, se nos presentan en este contexto, las posiciones encontradas sobre la extensión del mar territorial; la pugna entre las tres millas, regla prácticamente liquidada en la Conferencia de La Haya de 1930, y la extensión de 12 millas para el mar territorial que prevalece en la América Latina y que fuera defendido por México, Venezuela y países afro-asiáticos en Ginebra en 1960.

Ciertamente la figura de las 200 millas ha ganado terreno y apoyo. Entre el año de 1947 cuando Chile y Perú proclaman en sus ordenamientos internos su jurisdicción y control en un área de 200 millas marítimas y el momento actual en que 11 países latinoamericanos han adoptado esta figura, existe un

avance incontrarrestable. Los propios estados industriales como los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética han propuesto para la Conferencia de Ginebra de 1974 un límite máximo de 12 millas para el mar territorial y el reconocimiento de ciertos derechos preferentes para el Estado ribereño en los mares adyacentes.

Apreciamos en el artículo, posiblemente por la formación histórica del profesor Abadie-Aicardi, la falta de clarificación de la naturaleza jurídica de la zona de las 200 millas. En efecto, pensamos que la controversia central dentro de la familia latinoamericana está fijada bien en considerar a esta zona como mar territorial o como una figura relativamente distinta. Las posiciones varían independientemente del nombre con que sea designada la zona: *mar jurisdiccional*, *mar territorial*, *mar complementario*, *mar patrimonial*; la equiparación de la zona de las 200 millas con el mar territorial lleva a imponer ciertas limitaciones a la navegación a través del *derecho de paso inocente*; la concepción de las 200 millas como una noción relativamente distinta debe conducir a salvaguardar la libertad irrestricta de navegación en las 200 millas. Además de este elemento deben respetarse en las 200 millas la libertad de investigación científica y la libertad de pesca deportiva. Ésta sería la tesis del *mar patrimonial*. No obstante las posiciones de los Estados latinoamericanos están lejos de integrarse en una concepción uniforme y armónica.

Por el contrario, resultan de sumo interés diversos datos históricos que el autor brinda en su estudio.—Ricardo MÉNDEZ SILVA.

ATACHABAHIAN. *Some Aspects of International Double Taxation...* v. DERECHO ADMINISTRATIVO.

BATIFFOL. *L'improvisation de nouvelles règles de conflit...* v. DERECHO CIVIL.

CAFLISCH, Lucius C. *International Law and Ocean Pollutions: The Present and the Future*. "Revue Belge de Droit International", núm. 1, 1972, pp. 7-33. Bruselas, Bélgica.

El autor Lucius C. Caflisch, profesor asistente de Derecho internacional del Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, analiza los aspectos internacionales de la contaminación oceánica, relata brevemente lo que se ha hecho y lo que se debe hacer para eliminar, reducir o contener la contaminación de los mares.

El problema que trata el escritor se refiere principalmente a la contaminación de los mares por el petróleo, recordemos particularmente los acontecimientos en 1967 con el desastre del "Torrey Canyon". Aunque el petróleo es uno de los elementos contaminantes más comunes no es el único; debemos mencionar también los materiales radioactivos que comprenden cualquier especie de elementos orgánicos e inorgánicos.

Las reglas del Derecho internacional relacionadas con la contaminación oceánica, dice el autor, pueden dividirse en dos categorías: Normas del Derecho internacional general (que incluye el derecho consuetudinario internacional y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas), y las reglas derivadas del derecho convencional. Estas normas van a ser aplicables, en principio, cuando las normas de la primera categoría no hacen ninguna reglamentación.

Las normas de Derecho internacional que pueden ser aplicables a la contaminación oceánica pueden subdividirse en dos rubros: 1) relacionado con la materia del sujeto (*ratio materia*) y 2) en relación con los diferentes segmentos del mar al cual se van aplicar (*ratio loci*); aguas interiores, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, y alta mar.

Estas ideas el autor las desarrolla en dos grandes partes: el estado presente del Derecho internacional y la contaminación oceánica (páginas 9-28) y el futuro del derecho internacional en relación con la contaminación oceánica (páginas 29-33).

En la primera parte conforme al Derecho internacional general se mencionan algunas reglas relacionadas con el problema como: los derechos y los deberes de los Estados para prevenir la contaminación oceánica; normas para prevenir la contaminación oceánica por accidentes marítimos; etcétera.

En cuanto al derecho convencional, la prevención de la contaminación oceánica la encontramos en los siguientes instrumentos internacionales: *a*) la Convención de Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar (páginas 21-23); *b*) La Convención de Londres para la prevención de la contaminación por petróleo de los mares (1954-1962-1969) (páginas 23-25), el Nuclear Test Ban Treaty de 1963 (páginas 25 y 26).

Existen otras normas que se relacionan con los accidentes marítimos tales como: *a*) la Convención de Bruselas de 1969 en relación con la intervención en alta mar en caso de contaminación petrolera (página 27); *b*) El Acuerdo de Bonn de 1969 para prevenir la contaminación por petróleo en el Mar del Norte (páginas 27-28).

Todas estas disposiciones jurídicas internacionales demuestran que existe un mecanismo legal, que es complicado, para luchar contra la contaminación oceánica. La comunidad internacional está convencida de sus deficiencias. Esta preocupación se refleja en la resolución 2750 (XXV), adoptada el 17 de diciembre de 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se decidió la conveniencia de convocar una Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1973 (esta Conferencia se pospuso posteriormente). En esta Conferencia se estudiaría particularmente la prevención de la contaminación. A la resolución anterior siguió la 2749 (XXV) que contiene una declaración de principios que constituyen los objetivos que los Estados quieren alcanzar para resolver este difícil problema.

El estudio en cuestión contiene una selecta bibliografía de los diferentes temas analizados.—Luis MALPICA DE LAMADRID.

CARL, Beverly May. *The Brazilian Experiment in the Creation of an Aircraft Industry*. "Journal of Air Law and Commerce", vol. 38, núm. 1, 1972, pp. 35-31. Dallas, Texas. EUA.

Cuando un país con un ingreso anual *per capita* de 357 dólares, dice el autor, decide crear su propia industria aeronáutica, como el Brasil recientemente, es sorprendente para los excépticos extranjeros; sin embargo, los brasileños pueden responder con la aseveración que el primer aeroplano fue inventado por su compatriota Santos Dumont, más que por los hermanos Wright. Más aún, un intento para comercializar el transporte aéreo se inició en Brasil en los principios de 1890, cuando Leopoldo Correia da Silva lanzó una emisión de acciones de la compañía aérea brasileña de transporte para la construcción de dirigibles en Río de Janeiro. Aunque la aventura fracasó, los brasileños jamás renunciaron a su sueño de una industria aeronáutica doméstica.

Con una población de 96 millones de habitantes y un territorio más grande que el territorio continental de los Estados Unidos, Brasil todavía necesita un adecuado sistema ferroviario y un sistema de autopistas. El principal medio de comunicación al interior de sus regiones es el aeroplano y aún el ganado tiene que ser embarcado por aire. Una necesidad continua de transporte aéreo ha tenido como resultado que el Brasil use la mayor parte de sus recursos no sólo en la compra de grandes aviones comerciales, sino también de gastar 10 millones de dólares norteamericanos anuales para la industria aeronáutica pequeña, principalmente de los proveedores americanos, tales como Piper Cessna y Beechcraft. El mercado brasileño para aviones pequeños crece a una tasa de 5% anual.

Han habido varios intentos de compañías privadas brasileñas para dedicarse a la producción de los aviones pequeños; sin embargo, ninguna firma privada en Brasil posee los medios financieros suficientes para en forma independiente, diseñar y construir un avión prototipo acorde a las necesidades brasileñas.

El año de 1969 fue para Brasil un año económico muy bueno. El producto nacional bruto se incrementó en un 8.4% y la producción industrial saltó a un 13% más que el año anterior. La industria automotriz, ese mismo año, experimentó un notable crecimiento con más de 350 000 vehículos. La construcción de barcos mercantes logró 58 barcos de más de 200 toneladas de capacidad. Los líderes de la Nación decidieron que la época estaba madura para hacer un mayor esfuerzo y crear la industria brasileña de la aviación.

El autor analiza en esta forma los siguientes puntos: 1) Capacitación de la industria aeronáutica (páginas 38-46); 2) La producción de EMBRAER ("Empresa brasileña de aeronáutica") (páginas 46-47); 3) Importación de tecnología extranjera (páginas 47-48); 4) Desarrollo de mercados (páginas 48-94).

El autor termina diciendo que el modelo brasileño debe ser observado cuidadosamente por otras naciones. Si resulta un éxito, otros países pueden estructurando sus propias leyes de desarrollo, mirar al modelo brasileño que es único con una integración de los intereses públicos y privados, de la tecnología

extranjera y propia como por competentes empleados domésticos (página 51) y extranjeros (página 51).—Luis MALPICA DE LAMADRID.

DONNARUMMA, María Rosario. *La convention sur les missions spéciales* (8 décembre 1969), "Revue Belge de Droit International", 1972, núm. 1, pp. 34-79. Bruselas, Bélgica.

El 8 de diciembre de 1969 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, por la Resolución 2530 (XXIV), la Convención sobre las misiones especiales así como una circular referente al arreglo obligado de las diferencias. Se adoptaron asimismo las Resoluciones 2531 (XXIV) y 2532 (XXIV), la primera referente a las acciones civiles, y la otra expresando los agradecimientos a la Comisión de derecho internacional por el trabajo preparatoria efectuado.

La Convención la integran 55 artículos; los artículos 1-18 y el artículo 20 se refieren a la terminología, el envío, la estructura y el funcionamiento de la misión; los artículos 9 (párrafo 2) 19 y 21-49 a los privilegios y las inmunidades; los artículos 50-55 a las cláusulas finales.

Así se termina un trabajo comenzado, dice la autora, por la Comisión en derecho internacional en 1969. En ese año la Comisión adoptó, sobre la base de un rubro presentado por Sandstron, el primer proyecto de codificación en la materia. Este proyecto, estrictamente sumario, reflejaba una realidad normativa insuficiente y un mínimo contradictorio.

En efecto las normas generales existentes se refieren a aspectos secundarios del problema (por ejemplo los asuntos de rango: artículo 3 del Reglamento de Viena 1815), o adoptaban soluciones simplistas (asimilando el estudio del diplomático *ad-hoc* al diplomático permanente: artículo 3 de la Convención de la Habana de 1928). Estas normas nacidas de una realidad histórica diferente eran inaplicables a formas nuevas y originales que la diplomacia *ad-hoc* había venido experimentando especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

La autora nos hace notar que los acuerdos bilaterales, concluidos por los Estados en ocasión del envío de misiones especiales, diferían considerablemente en su contenido. Estaban a menudo redactados en términos ambiguos. Eran la expresión de una práctica extremadamente heterodoxa.

El proyecto presentado en la Conferencia que se reunió en Viena en 1961 fue rechazado. Una resolución, anexa a la Convención sobre las relaciones diplomáticas permanentes que fue adoptada en esta Conferencia invitaba a la Asamblea General de Naciones Unidas a reenviar la materia de las misiones especiales a la Comisión de Derecho Internacional para un estudio más completo.

El profesor Milan Bartos emitió tres informes que fueron examinados por la Comisión en sus sesiones 16, 17, 18 y 19 y condujeron a un nuevo proyecto de convención.

La Asamblea General de Naciones Unidas examinó este proyecto en su periodo

de sesiones 23 y 24 y adoptó el 8 de diciembre de 1969 la Convención sobre misiones especiales.

La doctora en derecho examina esta Convención en cinco partes: *I.* El fenómeno de la diplomacia *ad hoc* y el artículo 1 inciso *a*) de la Convención (páginas 37, 40); *II.* Los artículos 2-18 y el artículo 20 (páginas 41, 46); *III.* Los artículos 9, párrafo, 2, 19- 21-49 y la Resolución 2531 (XXIV) sobre el arreglo de los litigios en materia civil (páginas 46, 76); *IV.* Los artículos 50-58 (páginas 77-78) el Protocolo sobre el arreglo obligatorio de las diferencias (páginas 78-79).

La Convención, concluye diciendo la autora, asimila casi en todo punto las misiones especiales a las misiones diplomáticas permanentes. Esto es ciertamente uno de los aspectos más negativos de la obra realizada. Si ella ha contribuido, por una parte, a acelerar una cierta evolución de la práctica llamando la atención sobre un aspecto importante de las relaciones internacionales y solicitar a los gobiernos que tomen posición al respecto, la Convención tiene el riesgo, por otra parte, de haber forzado esta evolución de invalidar lo que se ha realizado de positivo y de privar en consecuencia a la Convención de su eficacia (página 79).—Luis MALPICA DE LAMADRID.

ENGEL, Salo y SÁENZ, Gonzalo. *Los derechos y los deberes fundamentales de los Estados. Algunas observaciones.* "Foro Internacional", número 49, julio-septiembre, 1972, pp. 1-10. México, D. F.

Así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue seguida más y más por la adopción de *Bills of Rights* del individuo en el nivel nacional y aún internacional, así, nuevas declaraciones sobre los derechos fundamentales de los Estados fueron diseñadas y adoptadas. El presente artículo, versión ampliada de un ensayo del primero de los autores citados, y adaptada por el segundo, actualmente funcionario de la OEA, gira en torno a los problemas y temas inscritos en la más reciente, es decir, en el Proyecto de Declaración sobre Derechos y Deberes de los Estados preparado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Por medio de la resolución 375 (IV) de diciembre 6 de 1949, la propia Asamblea General anotó que se habían encontrado algunas dificultades en la formulación de derechos y deberes *básicos* de los Estados a la luz de nuevos progresos en el Derecho Internacional y en armonía con la Carta de las Naciones, y reconoció la necesidad de continuar el estudio en relación a la materia. Sin embargo, la Asamblea General consideró a dicho proyecto de declaración como una "notable y sustancial contribución hacia el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación".

El artículo reseñado borda sobre la dificultad principal en esta materia que no es en sí la formulación de los derechos y deberes básicos de los Estados "a la luz de los nuevos progresos en Derecho Internacional y en armonía con la Carta de las Naciones Unidas", sino la admisibilidad en el Derecho Internacional de la noción misma de derechos y deberes básicos de los mismos. Por lo cual,

los autores tratan de dar el concepto y condiciones de dichos derechos y deberes básicos y plantean el supuesto de la Carta de las Naciones Unidas como una constitución internacional. Admitido este supuesto, buscan en su texto los que pudiesen ser considerados como principios de orden general y al mencionar el problema de la interferencia de índole ejecutiva o legislativa o de Estados terceros, derivan en el tema del control de la acción inconstitucional y sus formas de puesta en marcha.

Una vez visto el problema desde el ángulo del Derecho internacional positivo, se avocan al estudio del problema desde la óptica del Derecho natural y desembocan, lógicamente, en el concepto de *jus cogens* y su enunciado por el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de mayo de 1969, su eficacia, alcance e incompatibilidades.

Tema, efectivamente, muy complejo, tratado, por las limitaciones del espacio, con superficialidad no carente de orden y claridad.—Héctor CUADRA.

GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J. *Les relations extérieures de la CEE dans le domaine des politiques communes et l'arrêt de la Cour de Justice du 31 mars 1971*, "Cahiers de Droit Européen", núm. 2, 1972, pp. 127-158. Bruselas, Bélgica.

Tratar actualmente de las relaciones exteriores de las Comunidades y de las políticas comunes, dice el Procurador General en la Corte de Casación y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bruselas, es necesariamente referirse a la sentencia dictada el 31 de marzo de 1971 por la Corte de justicia de las Comunidades europeas en el asunto 22-70 que, por la primera vez, oponía la Comisión al Consejo de las Comunidades Europeas.

La sentencia es indudablemente una de las más importantes que la Corte haya rendido en el Derecho constitucional de las comunidades.

El asunto en referencia fue que la Comisión había hecho, en su recurso, reproches al consejo de haber violado el tratado, al obligar a los Estados miembros a negociar y a concluir un acuerdo con terceros Estados sobre los transportes por carretera, lo que sólo, según ella, la comunidad tiene competencia para hacer. Solicitaba a la Corte anular, en virtud del artículo 173, inciso 1 del tratado, una deliberación del consejo habilitando a los Estados miembros a negociar y a concluir este acuerdo conocido como acuerdo europeo relativo al trabajo de equipamiento de vehículos, efectuando transportes internacionales por carretera, negociado en el cuadro de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

El Consejo, que ponía en duda que esta deliberación constituía un "acto" susceptible de recurso conforme a los términos del artículo 173 del Tratado de Roma, sostenía que no era más que la constitución de la coordinación por los Estados miembros, del ejercicio de sus competencias retenidas.

Sin duda la Comisión no solicitaba la anulación más que de un acto del Consejo que dependía de la política común de los transportes y el litigio se circuns-

cribía a la limitación de las competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros para negociar y concluir acuerdos con terceros países en el campo de los transportes. Pero la Corte, sigue diciendo el autor, en su contestación, fue más allá del caso específico; el asunto que presentaba el recurso y sobre todo la contestación dada por la Corte volcaron todo el problema de la competencia exclusiva de la Comunidad para negociar y concluir acuerdos internacionales en la materia de políticas comunes y aun del *jus contrabendi* de la Comunidad.

El razonamiento por el cual la corte justificó la competencia exclusiva de la Comunidad para concluir acuerdos en materia de política de transportes no le permitía limitar su deducción a este solo objeto. Pasaba necesariamente por el poder que tiene la Comunidad de negociar los acuerdos internacionales.

La sentencia en cuestión, dice el autor, sin que uno pueda reprocharle a la Corte de haber violado el principio general de derecho que prohíbe al juez de estatuir sobre un asunto no solicitado, decidió que la Comunidad tiene virtualmente el poder de negociar y de concluir los acuerdos internacionales en todas las materias en las cuales tiene competencia para establecer normas comunes en el interior de la Comunidad (página 129). No solamente la competencia de ésta es una materia de orden público que la Corte, por lo tanto, lo hace de oficio, sino que se trata aquí, dice el profesor belga, del recurso en anulación de una deliberación del Consejo, calificado por la Corte "acto" en el sentido del artículo 173. El medio invocado era la "violación del tratado". La Corte debía pues examinar si el acto era o no conforme con las normas del tratado. Tenía, a este efecto, la libertad de tomar en consideración las normas pertinentes del tratado y del derecho relativo a su aplicación sin estar limitada por los argumentos de las partes.

A fin de cuentas, lo que se ventilaba delante de la Corte era la elección entre la acción comunitaria o la cooperación intergubernamental en el campo de políticas comunes, dejada a la apreciación del Consejo. Pero la Comisión no reivindicaba el monopolio absoluto de la acción convencional exterior en la política de los transportes: la competencia virtual de la Comunidad había devenido, sostenía ella, una competencia efectiva por la entrada en vigor de un reglamento del Consejo, que tenía el mismo objeto que el acuerdo europeo sobre los transportes en carretera; los Estados miembros no conservan, según la Comisión, su competencia más que por el tiempo en que la Comunidad no haya ejercido la suya estableciendo disposiciones comunes.

El autor hace un análisis completo de esta importante sentencia y llega a la conclusión que la actitud de la corte poniendo en plena luz el problema de las competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros, ha hecho una obra útil (página 158).—Luis MALPICA DE LAMADRID.

JAYME. *La costituzione tedesca e il diritto internazionale...* v. DERECHO CONSTITUCIONAL.

KALSHOVEN, F. *Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. The Conference of Government Experts, 24 may.12 june, 1971.* "Netherlands Year Book of International Law", año II, 1971, pp. 68-90. La Haya, Holanda.

Cuando el 12 de agosto de 1949, la Conferencia Diplomática de Ginebra, terminó su trabajo, una importante parte del derecho de conflicto armado había sido "codificado y progresivamente desarrollado" tomando en consideración la experiencia pasada contando de la Segunda Guerra Mundial como de otros conflictos armados. Sin embargo, dice el autor, importantes problemas sobre esta materia permanecieron al margen de los asuntos tratados por la Conferencia, y no encontraron solución en las cuatro convenciones que fueron adoptadas (página 68). La conferencia examinó los problemas concernientes a la protección de las víctimas de guerra más que a la guerra misma.

Ninguno de otros cuerpos especializados han mostrado ansiedad respecto de estos problemas. La Comisión de Derecho Internacional, al organizar sus trabajos en 1949, decidió no incluir como punto de su agenda las "leyes de la guerra". La Asamblea General de las Naciones Unidas, por su parte, afirmó en 1946 que los principios contenidos en la Carta y en los juicios de Nuremberg constituían el único resultado semejante. De ese periodo, después de las Convenciones de Ginebra de 1949, fue la adopción en La Haya, el 14 de mayo de 1954, de la Convención para la Protección de la Propiedad Cultural en caso de Conflicto Armado, convención que se concluyó bajo los auspicios de la UNESCO.

En esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja sintió, nos sigue diciendo el autor, que no podía permanecer en silencio frente a peligros obvios relacionados con la población civil. Así en 1955 elaboró un "Proyecto de reglas para la protección de la población civil contra los peligros de una guerra indiscriminada". La tarea del Comité Internacional de la Cruz Roja continuó; así en su vigésima Conferencia Internacional celebrada, en 1965, en Viena adoptó una resolución estableciendo ciertos principios básicos en todos los conflictos armados, con el propósito de desarrollar un Derecho internacional humanitario. Este trabajo se continuó durante la vigésima primera Conferencia Internacional de la Cruz Roja que se celebró en Istambul en 1969.

Las Naciones Unidas han tomado un gran interés respecto de este problema a partir de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que se celebró en Teherán en el segundo trimestre de 1968, donde se adoptó una resolución haciendo resaltar más las necesidades de una mejor aplicación de las leyes existentes y de la necesidad de nuevos instrumentos para la mejor protección de civiles, prisioneros y combatientes en todos los conflictos armados.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en el vigésimo tercer periodo de sesiones tomó una resolución denominada "Respeto por los Derechos Hu-

manos en los Conflictos Armados" afirmando, por un lado, los principios formulados en 1965 en la Conferencia de Viena de la Cruz Roja y, por el otro, encargando al Secretario General de proceder de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, a los estudios solicitados por la Conferencia de Teherán.

Con estos antecedentes el Comité Internacional de la Cruz Roja consideró que ya podría convocarse a una conferencia diplomática, con el objeto de formular nuevas leyes aplicables en la materia. Sin embargo, antes de llegar a esto, el propio Comité Internacional de la Cruz Roja después de consultas con el Secretario General de las Naciones Unidas tomó la iniciativa para convocar a una conferencia de expertos gubernamentales. La idea de esta conferencia fue que en esta forma los gobiernos participantes tendrían una oportunidad de intercambiar puntos de vista sin ninguna formalidad y sin previas posiciones sobre la materia.

La conferencia fue fijada para celebrarse en mayo y junio de 1971. Fue, sin embargo, precedida por otra conferencia de expertos con un carácter más o menos preparatorio.

El autor hace un examen de esta Conferencia de Expertos celebrada del 24 de mayo al 12 de junio de 1971 (páginas 72-89). Analiza los trabajos de las cuatro comisiones que se constituyeron.

El autor termina diciendo que la próxima conferencia, convocada para mayo de 1972, representa un gran paso hacia la convocatoria de una conferencia diplomática final: donde los gobiernos de todos los Estados partes en las Convenciones de Ginebra de 1949 están invitados a enviar sus representantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja someterá a la Conferencia proposiciones concretas en forma de proyecto de texto (página 90).—Luis MALPICA DE LAMADRID.

KISS, Alexandre Charles. *Droit comparé et droit international public*. "Revue Internationale de Droit Comparé", año XXIV, núm. 1, enero-marzo de 1972, pp. 5-12. París, Francia.

Hoy en día la interdisciplinaridad está de moda en todas las esferas de la investigación. Sería injusto reducir el fenómeno a un capricho pasajero, pues la interdisciplinaridad corresponde a una necesidad real, debida a la interpenetración reciente entre diferentes disciplinas de las ciencias humanas. Por ejemplo, no se concibe estudiar problemas de derecho penal e ignorar la sociología, la psicología y las ciencias estadísticas.

A primera vista, derecho comparado y derecho internacional público tienen un elemento común: el primero compara sistemas jurídicos diferentes, el objeto del segundo son las relaciones entre entidades dotadas de sistemas jurídicos propios. Existe una verdadera interpenetración entre estas dos ramas del derecho, que el autor se propone poner de relieve.

I. Aportación del Derecho Comparado al Derecho internacional público. Esta aportación concierne a los métodos y al derecho substancial. En cuanto al método, puede afirmarse que si el Derecho internacional tiende a reglamentar las relaciones entre sujetos de derecho que tiene cada uno su propio sistema jurídico, le beneficia conocer dichos sistemas internos, cuando menos en la medida en que éstos son el origen de decisiones relativas al orden internacional. En otras palabras, es necesario conocer los órganos que actúan en nombre de un Estado, elaboran las decisiones son competentes para negociar, firmar y ratificar los tratados, representan al Estado en las relaciones internacionales y toman parte en las actividades de las diferentes organizaciones internacionales. La aportación metodológica del derecho comparado al derecho internacional consiste, pues, en proporcionarle los instrumentos que permitirán a éste conocer la repercusión de los actos internacionales. Sin embargo, no se limita únicamente a eso: al lado de los Estados también han adquirido la calidad de sujetos del derecho internacional las organizaciones intergubernamentales. El método del derecho comparado es útil para conocerlas mejor y la obra realizada en este sentido por la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado reviste una importancia particular para los internacionalistas.

Por otra parte, para que se establezcan determinadas reglas del derecho internacional es necesario recurrir al derecho comparado. Entre estas reglas puede hacerse una distinción entre principios de derecho material y principios de derecho procesal. Para la primera categoría citemos los principios de buena fe, el carácter obligatorio de los compromisos convencionales, la reparación de los daños, el enriquecimiento ilegítimo y la prescripción. Los principios procesales aplicados por las jurisdicciones internacionales son las pruebas, la fuerza de la cosa juzgada, etcétera.

II. Aportación del Derecho internacional al Derecho Comparado. Esta aportación reviste también dos aspectos: método y derecho substancial. En verdad, resulta más preciso hablar de técnica más bien que de método. En efecto, es un técnica lo que el derecho internacional proporciona al derecho comparado cuando éste pasa de la etapa de la investigación para penetrar en la de las realizaciones concretas. La unificación del derecho —uno de los objetos del derecho comparado— puede realizarse según dos procedimientos: la elaboración de una ley uniforme para varios países, o bien la celebración de un tratado internacional. En estos dos casos pertenece al derecho internacional proporcionar la técnica de la negociación y del convenio.

En fin, la evolución reciente de la vida internacional subraya la importancia de la aportación del derecho internacional al derecho comparado. Debido a la extensión progresiva, pero rápida, de la cooperación en dominios cada vez más numerosos —economía, finanzas, salud, tecnología, educación, etcétera—, la vida cotidiana de las naciones se encuentra sometida a reglas convencionales internacionales, es decir que depende formalmente del derecho internacional. Las reglas así elaboradas —que, a veces, forman un sistema jurídico bastante homogéneo, como es el caso del derecho de las comunidades europeas— no

pueden ser ignoradas por los que estudian y comparan los diversos sistemas jurídicos internos.—Monique LIONS

LEU, Hans-Joachim. *Introducción al estudio de las relaciones internacionales*. "Politeia", núm. 1, 1972, pp. 89-119, Caracas, Venezuela.

Muy útil puede ser la lectura del presente artículo de Leu, en que no se ocupa del estudio de problemas concretos planteados por las relaciones internacionales de los Estados (historia de las relaciones internacionales o historia de la diplomacia, o sencillamente derecho internacional), sino que trata el autor de ofrecer al lector unos instrumentos mediante los cuales pueda éste aproximarse al conocimiento exacto del fenómeno de las relaciones internacionales y pueda interpretarlas más adecuadamente. Por este "enfoque" novedoso y útil, de tipo previo, metodológico, o de orientación para el que se inicia —sobre todo— el estudio de las relaciones, es por lo que me ha parecido importante el artículo de Leu. ¿Cómo se puede llegar al conocimiento más perfecto del fenómeno de las relaciones internacionales?

El investigador, nos viene a recomendar Leu, una vez seleccionado el tema —objeto del estudio— ha de procurar captar bien el "enfoque" que dicho tema posea: es decir, debe buscar determinar el "marco" o el lugar concreto de referencia y destacar los datos relevantes para la comprensión total del tema. A esta tarea de "presentación descriptiva de los datos, en opinión del investigador relevantes para la comprensión del tema", llama Leu "enfoque descriptivo" o recopilación de datos indispensables, "bien para el conocimiento del tema, bien para reunir suficientes interrogantes para emprender ulteriores investigaciones de un fenómeno concreto". Tal método es el que ya se ha ensayado en la historia de las relaciones internacionales; o respecto de fenómenos internacionales más específicos, tales como la estrategia de la guerra y de la paz, etcétera. Con todo, este método del "enfoque descriptivo" es insuficiente por sí solo y por ello conviene su uso en compañía de otros métodos, sobre todo, cuando el tema presente una mayor complejidad, seguido de un buen criterio de selección de datos.

Después se opera sobre los datos obtenidos a través del método del "enfoque descriptivo" con el método que el autor llama "de enfoques conceptuales", que no son otra cosa que aquellos conceptos "que indican la dirección de la investigación a ser llevada a cabo,

constituyendo una especie de determinación del enfoque en virtud de que configura una construcción mental que delimita nuestro marco de referencia para la investigación, al tiempo que traza los criterios de relevancia para la selección de datos, y que a veces sugiere hasta los instrumentos a ser utilizados en la investigación.

Y uno de tales enfoques conceptuales es el del "interés nacional" para el que trabaja tanto el Estado, como actor o agente más cualificado en la escena

internacional, pero sin olvidar a otros actores, como empresas o particulares, siendo objeto de nuestro estudio la "formulación de sus decisiones", que son las determinantes de su conducta "internacional".

Otro grupo de enfoques viene dado por el estudio de los orígenes de los conflictos, es decir, conviene conocer las causas concretas que provocan dichos conflictos, con el fin último de evitarlos precisamente. Tal, por ejemplo, la tendencia presente de la "investigación sobre la paz"; con la especificación de las "variables que puedan ocasionar la materialización del conflicto"; variables intangibles como relaciones afectivas (el odio hacia otros grupos), proyecciones de conflictos internos al mundo exterior; y variables tangibles, como la estructura económica de un país, su desarrollo militar, su situación geográfica, etcétera.

El estudio de los conflictos mismos puede suministrar un enfoque para la investigación. La oposición de intereses más o menos intensos que implica para cada actor la necesidad de decidir entre una de las alternativas de acción que estén a su disposición o, que implica, de no haber varias, la necesidad de negociar.

También el estudio de los sistemas se ha venido utilizando en los últimos años como medio de investigación. Existe sistema internacional: cuando se den unas partes integrantes identificadas; que estén relacionadas unas con otras; y que éstas sean más o menos regulares. Por ejemplo, el sistema de equilibrio de poder; el bipolar laxo, que enfrenta a actores agrupados en "bloques"; el sistema internacional jerárquico; el sistema internacional de unidad de veto, etcétera.

El autor, en fin, expone algunos inconvenientes comunes a los enfoques que examina, y sus propias conclusiones.—José BARRAGÁN B.

MEIJERS, H. *Carifta and Association*. "Netherlands Year Book of International Law", año 1, 1970, pp. 55-71. La Haya, Holanda.

Carifta, Asociación Caribeña de Libre Comercio, es una asociación integrada por territorios coloniales o ex coloniales de Gran Bretaña. El anexo A del acuerdo establece esta organización internacional y abre la posibilidad de establecer una tarifa común externa para todos los miembros. De realizarse esta unión de libre comercio gradualmente se transformaría en una unión aduanera. Planes más ambiciosos están establecidos en el acuerdo y en sus anexos. Carifta incluye los siguientes miembros: los Estados independientes de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago; las colonias británicas de Monserrat, de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nevis-Anguila, Santa Lucía y San Vicente, llamados Estados asociados a causa de su estatuto especial. Entre otros, Honduras Británica (Belice), las Bahamas y Santo Domingo, que han mostrado interés en participar en la Asociación como miembros.

Representantes de la Comunidad Económica Europea y Carifta están estimando la posibilidad de establecer una asociación entre las dos áreas res-

pectivas. Para los territorios de Carifta un acuerdo de asociación sería de importancia primordial, si tomamos en consideración que su cliente principal, el Reino Unido ya es miembro del Mercado Común Europeo.

El autor examina las siguientes materias: el poder de los miembros no independientes de Carifta para concluir acuerdos de asociación (páginas 56-63); cómo establecer un acuerdo de asociación: el procedimiento desde el punto de vista de Carifta (páginas 63-68); los poderes de los representantes de la Conferencia Gubernamental (páginas 68-71).

El autor, al concluir, se hace la siguiente interrogación: quién, en la Asociación Caribeña de Libre Comercio, tiene la capacidad suficiente de concluir un acuerdo de asociación, por ejemplo, con la Comunidad Económica Europea.

El escritor reconoce que el acuerdo que estableció Carifta es ambivalente. Los poderes de los representantes de la Conferencia gubernamental, por un lado, y cada uno de los territorios en relación con sus habitantes, es la otra ambivalencia que se debe resolver para que Carifta pueda tener el éxito por el cual se está trabajando.—Luis MALPICA DE LAMADRID

MELCHIOR. *L'appartenance de la Belgique à des organisations...* v. DERECHO CONSTITUCIONAL.

MIRIMANOFF-CHILIKINE, J. *Protection de la population et des personnes civiles contre les dangers résultant des opérations militaires*. "Revue Belge de Droit International", núm. 1, 1972, pp. 101-142. Bruselas, Bélgica.

La primera parte de este estudio se encuentra en la misma revista correspondiente a 1971-2, páginas 619-662. Como el conjunto del estudio fue concluido antes de la Conferencia de Expertos Gubernamentales, que se celebró del 24 de mayo al 12 de junio de 1971, no consagra los trabajos de la primera sesión de esta Conferencia.

En esta segunda parte el autor analiza la protección de los objetos no militares (páginas 101-106). Hace notar que la regla según la cual las operaciones militares no deben ser dirigidas contra los objetos no militares en general, en todos los conflictos armados, no ha sido especialmente consagrado por una disposición escrita y general del derecho en vigor, y tampoco en el derecho consuetudinario. A pesar de su alcance relativamente limitado, el autor cree importante subrayar los artículos 23 inciso 6, 25 y 27 del Reglamento de la Haya de 1907 y los artículos 33 y 53 (del título Tercero, Sección Primera y Segunda) de la IV Convención de Ginebra de 1949. Estos artículos de derecho en vigor pueden ser tomados en consideración como un punto de partida para un desarrollo eventual.

Es, pues, necesario desarrollar la protección de los objetos no militares, teniendo en consideración de que merecen una protección, no tanto en razón de ellos mismos, como en función de la importancia que presentan para la

población civil. Aunque la protección que se le pueda acordar a estos objetos no militares no sea tan amplia como la que se le da a la población civil.

El autor analiza asimismo en el punto IV las medidas complementarias para reforzar la protección de la población civil (páginas 106-128). En este rubro se estudian las precauciones a tomar para proteger a la población civil y a los objetos no militares (medidas de respeto y medidas de salvaguardia) (páginas 107-116); zonas bajo protección particular (páginas 116-125); otorgamiento de ayuda internacional a la población civil (páginas 125-127). En el punto V se ven los medios considerados como ilícitos (páginas 128-139) que es el último apartado analizado en el estudio en cuestión. Se pasa una revista completa de la protección a la población civil contra ciertos bombardeos; se analizan la validez de las disposiciones del derecho de La Haya de 1907, la protección de la población civil contra los efectos de ciertas armas; el asunto de las armas en el desarrollo actual del derecho internacional humanitario; algunos problemas relativos al protocolo de Ginebra de 1925 y a determinadas armas: gases no tóxicos, armas incendiarias, etcétera; protección de la población civil contra ciertos métodos de la guerra económica; destrucción de los objetos no militares indispensables a la sobrevivencia de la población civil; el bloqueo, etcétera.

El autor concluye diciendo que ha intentado demostrar que el derecho en vigor consagra ya la protección de los civiles contra los peligros de las hostilidades y, en una menor medida, de los objetos no militares, estimando que, a pesar de su importancia respectiva, las normas —imprecisas— del derecho consuetudinario, las normas —inadaptadas— de las Convenciones de La Haya y aquéllas, algunas veces muy específicas —deberán ser reafirmadas o desarrolladas en un verdadero instrumento jurídico, y no solamente en las resoluciones internacionales (páginas 140).

Las normas relativas al respeto y a la salvaguardia de los civiles y de sus bienes no constituyen y no constituirán más que un paliativo, aunque indispensable mientras no se hayan explorado, encontrado y aceptado los procedimientos propios para arreglar pacíficamente las diferencias, y mientras que una paz auténtica universal y definitiva no haya sido instaurada, termina diciendo el autor.—Luis MALPICA DE LAMADRID

PESCATORE, P. *The Protection of Human Rights in the European Communities*. "Common Market Law Review", vol. 9, núm. 1, 1972, pp. 73-79. Londres, Inglaterra.

El profesor Pescatore reconoce que su artículo tiene dos objetivos: informar del estado en que se encuentra la protección básica de los derechos humanos en la Comunidad europea; y mostrar que es posible la protección de los mismos derechos humanos por medios judiciales, aun en ausencia de cualquier previa "declaración de derechos".

En esta forma los apartados del trabajo en cuestión son los siguientes:

I. Primeros contactos con el problema de la protección básica de los derechos (páginas 74-75); *II.* La inaplicabilidad de los pactos internacionales en la comunidad (páginas 75-76); *III.* Casos recientes analizados en la Corte de Justicia (páginas 76-78); *IV.* Conclusiones (página 79).

El profesor Pescatore insiste que el nuevo concepto, en relación con los derechos humanos, es el de que es posible construir un sistema protector de esos derechos fundamentales independientemente de cualquier "declaración de derechos". Sin embargo tal construcción es concebible sólo en el contexto de una autoridad judicial sólidamente organizada, investida con la correcta autoridad judicial y poderes. En la comunidad, sigue diciendo el profesor italiano, todo deriva de la atribución básica de poderes a la Corte de Justicia manifestada en estos términos: La Corte de Justicia se asegurará de que la ley es observada en la interpretación e implementación de este Tratado (artículo 164 del Tratado de Roma). En esta fórmula se hace referencia al respeto de la ley, pero dentro de un campo más amplio que el de la ley escrita en los Tratados y en los actos de aplicación. Desde el principio la Corte ha sentido esta responsabilidad, y la ha manifestado por el frecuente recurso a "los Principios Generales de Derecho" y al referirse al concepto de "tradiciones legales comunes" en los Estados miembros. Esto es precisamente lo que ha inspirado las decisiones recientes que garantizan los derechos fundamentales del hombre.

Sin embargo, se puede decir que esta construcción está solamente en su infancia. Se espera, sin embargo, que el material que provee la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos pueda eventualmente ser considerada como parte de la ley común de los Estados miembros; en este instrumento internacional explícito está representada la mejor posible combinación de las tradiciones constitucionales de los Estados a los cuales la Corte se ha referido.—Luis MALPICA DE LAMADRID

SCHMILL ORDÓÑEZ. *La soberanía y el derecho internacional...* v. DERECHO CONSTITUCIONAL.

SWAN SIK, Ko. *The "External Status" of the International Court of Justice, and of its Members and Personal, in their Relations to the Netherlands.* "Netherlands Yearbook of International Law", año 1, 1971, pp. 98-107. La Haya, Holanda.

El 17 de abril de 1969 la Corte Internacional de Justicia decidió, por medio de resolución, proponer una enmienda a los artículos 22, 23 y 28 de su Estatuto. En esencia la enmienda propuesta tiende a facilitar algunos cambios en relación con la sede de la Corte que el artículo 22, párrafo 1, de su Estatuto ha fijado en La Haya.

Aunque la Corte, dice el autor, no propone cambiar la sede de la misma, su iniciativa da lugar a especular acerca de la insatisfacción con su actual posición en La Haya. Es difícil, comenta el profesor Ko Swan Sik, concebir que

esta insatisfacción haya nacido tan rápido y sin conocimiento del gobierno de los países bajos (página 98).

Tal falta de armonía parece no ser excepcional en las relaciones del gobierno de los países bajos y de la Corte. Desde el establecimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional dos aspectos constituyeron una causa latente de mutua inconformidad: Los privilegios y las inmunidades de los miembros del personal de la Corte, y el asunto de la precedencia de los jueces en relación con el cuerpo diplomático y los funcionarios holandeses en La Haya.

Inmediatamente después de su inauguración la CPJI sostuvo su primera sesión (del 30 de enero de 1922 al 24 de marzo de 1922) durante la cual las Reglas de la Corte se elaboraron, mientras la Corte prestó atención al asunto del rango y de los títulos de los jueces. Estas preocupaciones fueron sometidas por la Corte al Consejo de la Liga. Se reconoció unánimemente que el asunto de precedencia estaba íntimamente relacionado con el asunto de dignidad de la Corte, se reconoció al mismo tiempo que el asunto del rango tenía importancia solamente desde el punto de vista de determinar la precedencia que se le daría a los jueces en las ceremonias oficiales.

El Consejo decidió que el asunto debería ser resuelto con las autoridades locales, y que por lo tanto debería de celebrarse un acuerdo entre la Corte y las autoridades de los Países Bajos. Sin embargo, este asunto no pudo ser resuelto satisfactoriamente.

El 6 de abril de 1927 el presidente de la Corte envió un memorándum al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El asunto en cuestión se centró en la precedencia y no en los privilegios e inmunidades de los jueces. A este memorándum el gobierno de los Países Bajos contestó con otro que no satisfizo completamente las interrogantes de la Corte; se listó en los asuntos a examinar por el Consejo y su análisis se pospuso, ya que se celebró un acuerdo entre la Corte y el gobierno de los Países Bajos. Este acuerdo, confirmado por un intercambio de notas entre el presidente de la Corte y el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, con fecha 22 de mayo de 1928, se estableció bajo la forma de cuatro "Principios Generales" implementado por "las Reglas de Aplicación".

De los cuatro Principios Generales, los primeros dos se relacionan con los privilegios e inmunidades diplomáticas *stricto sensu* mientras que los otros dos con la precedencia.

El autor examina estos principios (páginas 103-107) que son aplicables a la actual Corte Internacional de Justicia.—Luis MALPICA DE LAMADRID

DERECHO MERCANTIL

CAÑO ESCUDERO, Fernando del. *La tasación pericial en los seguros de daños.*

"Revista de Derecho Mercantil", núm. 124, abril-junio, 1972, pp. 245-255.

Madrid, España.

Señala el autor la importancia, dentro de la mecánica del seguro de *daños*, del momento del *sinistro*, particularmente por lo que hace al procedimiento en la